

La cultura jurídica y política venezolana no ha cambiado de la noche a la mañana, pero esperemos que hayamos comprendido que una verdadera constitución, vivida como parte de una cultura que se comprometa con el estado de derecho, es indispensable para asegurar la convivencia futura.

### Referencias

Casal, J.M. y A. Chacón Hanson (coordinadores) (2001): *El nuevo derecho constitucional venezolano*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Combellas, R. (2001): *Derecho constitucional. Una introducción al estudio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas: Mc Graw Hill.

Navas Blanco, A. (1993): *Las elecciones presidenciales en Venezuela en el siglo XIX, 1830-1854*. Caracas: Academia Nacional de la Historia.

Pérez Perdomo, R. y A.M. San Juan (1994): "Iguales *ma non troppo*: la condición jurídica de las mujeres en Venezuela en el siglo XIX". *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela*. No. 91.

Valera, I. de (coordinadora) (2000): *La constitución de 1999*. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

## En este país sitiado por sí mismo

Ramón Piñango



«... yo cambio la gloria  
por la dicha enorme de estar en tu historia».

*Armando Manzanero*

El conjunto de trabajos que integran este libro puede ser interpretado de muy distintas maneras. No hay interpretación que pueda reclamar para sí validez absoluta. Cada lector sacará de los capítulos anteriores conclusiones que dependerán, como siempre, de los sesgos profesionales, de las preferencias políticas, de las experiencias de cada cual. Este capítulo final no tiene otra intención que presentar una versión de lo que ocurre en el país y esbozar algunos lineamientos que parecen necesarios si, como nación, queremos andar por mejor camino.

Este último capítulo no pretende ser de consenso. No es posible afirmar que todas las personas que trabajaron en la preparación de este libro comparten las ideas expresadas en las líneas que siguen. Sí puede asegurarse, sin embargo, que quien ha escrito este capítulo ha prestado la mayor atención a la información y los planteamientos de los trabajos precedentes. Obviamente, la lectura de tan variado material ha sido hecha desde el punto de vista particular de quien redacta estos párrafos. Ese punto de vista —como cualquier otro— está matizado por una concepción particular de la situación del país, de su historia, de la observación personal de lo ocurrido en las últimas décadas, y de un modo de entender las transformaciones de la realidad.

Se ha evitado hablar de programas de gobierno, para concentrarse en lo que se considera esencial, sea cual fuere el programa propuesto, presuponiendo que la acción pública se desarrollará de acuerdo con los principios de un sistema democrático. Se habla de prioridades porque, ciertamente, algunas cuestiones son indispensables para evitar males mayores, si queremos salir, al menor costo humano posible, de la complejísima situación en que se encuentra la Venezuela de hoy. De esa complejidad han dado buena cuenta los ensayos que integran esta compilación de puntos de vista y pareceres de la gente del IESA. La intención de este capítulo de cierre es estimular una amplia y fructífera discusión de todo el material presentado en estas páginas. Ojalá se cumpla este propósito.

### **Como en un país sitiado por sí mismo**

La lectura de este libro puede ser agobiante. Demasiadas frustraciones, demasiados problemas por resolver, demasiados obstáculos que salvar para mejorar las cosas. Una abrumadora evidencia demuestra que nosotros mismos, como sociedad, creamos —de manera meticulosa— un país que, desde hace un cuarto de siglo, se deteriora progresivamente, a pesar de que pare-



cíamos contar con invalorable ventajas –la riqueza petrolera, un prolongado período de paz social, entre otras– para impulsar un proceso de continuo desarrollo. Nosotros, y nadie más, creamos el país que hoy tenemos: de creciente pobreza, economía improductiva, Estado deshilachado, instituciones desbaratadas, industria petrolera devastada, territorio invadido por fuerzas irregulares, inseguridad personal y jurídica, grupos medios y altos que temen a la posibilidad de un régimen comunista, fuga de gente hacia el exterior...

Sin haberlo deseado llegamos a una situación que percibimos y sentimos como si viviéramos en un país sitiado. Las numerosas dificultades tienden a desanimar a la población, al crear esa sensación, compartida por muchos –en particular por los estratos sociales medios y altos–, de que, en plazo previsible, no tenemos remedio como sociedad, de estar jugándonos cosas esenciales como la cohesión y la paz social, el derecho a la propiedad, la libertad de expresión, el espacio que habitamos y el mismo derecho a la vida. No es de extrañar que, en la pequeña conversación cotidiana, entre familiares o amigos, emerja el tema de la emigración hacia el exterior, como si se tratara de escapar de un territorio sitiado por fuerzas enemigas irresistibles, del cual hay que salir antes de que sea demasiado tarde.

Pero la metáfora del país sitiado no se refiere simplemente a una sociedad atacada por fuerzas externas sino, más precisamente, a una nación bajo ataque por fuerzas que actúan desde adentro. Desconfiamos de nosotros mismos, tendemos a buscar el enemigo en la gente que nos rodea, incluso entre quienes dicen estar dando la pelea por nosotros: las personas que no hacen explícitas sus posiciones, los empresarios irresponsables, los militares gobierneros, los esquiroleros del paro, las empresas multinacionales, los partidos políticos de la Cuarta República, quienes asoman sus aspiraciones políticas. Si alguien le parece exagerada la metáfora del país sitiado, que considere el gasto en seguridad en zonas rurales o los elaborados planes de defensa de las urbanizaciones caraqueñas.

El sentimiento de miedo se agrava porque el gobierno se ha declarado revolucionario y abiertamente demuestra sus simpatías por regímenes como el cubano. Esto es un hecho que cualquiera puede constatar. La prensa, además, nos informa de la presencia de cubanos en el país y de su participación en asuntos políticos. Agreguemos las frecuentes denuncias acerca de la presencia de guerrilleros y paramilitares colombianos en el territorio nacional. Si alguien, en un afán de objetividad analítica, quiere hablar de «paranoia» cuando la gente muestra miedo en relación con el futuro del país, es conveniente que considere la información que alimenta los temores. Hay razones para temer.

Lo del país sitiado por sí mismo se refiere, entonces, a una situación configurada, por factores socioeconómicos y políticos, y, además, por un clima de aguda ansiedad social. Entre aquellos factores señalemos la caída de la inversión pública y privada, el decrecimiento del producto, el empeoramiento de la distribución del ingreso, el agudo conflicto social. La ansiedad social la alimenta la incertidumbre, el miedo, la desconfianza y la duda en relación con el gobierno, la oposición, el futuro del país, el liderazgo político, y estratos o sectores sociales a los que uno no pertenece. Ambos tipos de elementos se completan o refuerzan mutuamente. Claro ejemplo es el desplome de la inversión privada como consecuencia de la desconfianza generada por las manifiestas intenciones revolucionarias del gobierno.

Somos un país sitiado por agudos problemas y la angustiada percepción de que vamos de mal en peor. ¿Quién puede dirigir los esfuerzos para vencer el sitio? ¿Dónde están los líderes? Perdidos en la confusión reinante, presionados por unos simpatizantes de la oposición o el gobierno que exigen respuestas rápidas a sus problemas, inseguros, pendientes de las encuestas, excesivamente temerosos del riesgo de perder el apoyo popular grande o pequeño con el que hoy cuentan. Se trata de un liderazgo insuficientemente cristalizado para exigirle a los seguidores determinado comportamiento. Tiene dificultades para expresar un no contundente a lo que considera inadecuado –digamos, una alianza éticamente inaceptable–, para integrar acciones de calle, en el parlamento y los concejos municipales, o para moldear las incursiones de gremios y medios de comunicación social en la contienda política. La ausencia de un liderazgo efectivo potencia la sensación de indefensión en la población que se percibe sitiada. La hace buscar ansiosamente ese liderazgo, lo cual, curiosamente, torna más difícil el surgimiento de los líderes. Nadie parece suficientemente preparado, impoluto, convincente, activo, experimentado o carismático para merecer la confianza de todos. Y creemos que, sin confianza en algo, o en el liderazgo de alguien, será difícil salir vencedores del sitio que nosotros mismos hemos montado.

¿Cómo se reconstruye un país sitiado por sí mismo? Ante todo, con plena conciencia de que una nación se reconstruye a sí misma. No hay salvación desde afuera. Por eso es difícil actuar para salir de la compleja circunstancia en que nos ha colocado la historia. Cualquier acción genera reacciones en contra, casi inmediatamente. Que sirvan como ejemplo la Mesa de Negociación y Acuerdos, y las discusiones en la Coordinadora Democrática, siempre entorpecidas por actores incapaces de ver más allá del eventual reemplazo del actual gobierno. Por eso, habrá que crear la dirigencia que no existe, de abajo hacia arriba. Las argucias publicitarias de antes no servirán de mucho



en estos tiempos, por lo menos no serán tan efectivas como en el pasado, para embutirle a la gente las preferencias políticas de quienes gobiernan o aspiran a gobernarlos.

### **Ante tres caminos**

¿Podemos enfrentar el estado de sitio montado por nosotros contra nosotros mismos? ¿Cómo hacerlo? La respuesta a estas interrogantes dependerá de posiciones ideológicas, intereses políticos, enfoques analíticos y percepciones de la realidad. Sin embargo, si se observa la discusión pública y la conversación cotidiana, nos percatamos de que tres perspectivas compiten para dominar el abordaje de los problemas del país: la revolución, la imposición del orden a como dé lugar y la profundización de la democracia. Las tres perspectivas son claramente diferentes y cada una parece contar con un importante grupo de seguidores. Parecemos estar ante una encrucijada de tres caminos. Cada opción despierta pasiones a favor y en contra, lo que es comprensible porque vivimos tiempos apasionantes. Sin embargo, más allá de las pasiones, es necesario tratar de comprender lo que cada camino ofrece.

Quienes se proclaman revolucionarios muestran su cansancio por tantos incumplimientos de las promesas de igualdad y justicia social. Consideran que el enfrentamiento radical que desplace los poderosos de siempre es el único medio efectivo para alcanzar esas metas. ¿Que en las revoluciones aparecen abusadores que se aprovechan de las circunstancias para beneficio personal o grupal? Es cierto. Como es verdad, también, que pueden sufrirse penurias tan graves como la escasez de alimentos, la invasión de calles y avenidas por buhoneros o el incremento de la inseguridad personal. Pero estos males son transitorios; cuando la revolución triunfe definitivamente, males como estos desaparecerán para siempre.

Para los conservadores que proclaman la urgencia de imponer el orden y la autoridad, con la fuerza si es necesario, la amenaza fundamental tiene ya manifestaciones concretas como la delincuencia desbordada, la guerrilla colombiana, las invasiones de tierra y el desgobierno de la administración pública. El país está alzado, la paz social es muy precaria, la soberanía peligra. Sin autoridad ni paz social no tendremos una economía productiva ni mejorará la vida de la gente. Reconocen el riesgo de la violación de los derechos humanos, pero recalcan que para que reinen estos derechos primero debe reinar el orden.

Por su parte, los viejos y nuevos creyentes en las bondades de la democracia insisten en la importancia del sistema político que respete la disidencia, que consulte la opinión de los ciudadanos, que opere de acuerdo con el principio de la separación de poderes. Sólo así se logrará establecer

justicia duradera, orden y prosperidad. Reconocen el peligro de que el respeto a los derechos de los ciudadanos sea utilizado por los extremistas de derecha o de izquierda para poner en jaque la democracia.

Es inevitable que etiquetemos las opciones, al imaginarnos lo que, a fin de cuentas, cada una de ellas puede llegar a configurar: un comunismo a la cubana; un régimen autoritario de derecha; una precaria democracia liberal. Ojalá que la simplificación de las etiquetas no inhiba la reflexión, al despreciar los argumentos de cada opción calificándolos de irracionales. La encrucijada nos obliga a pensar con más cuidado; al menos a conceder que puede haber algo de verdad en las razones de cada posición y a percatarnos de posibles dilemas. Así, quienes han visto deteriorarse los indicadores sociales y la debilidad de instituciones clave, como las encargadas de administrar justicia, tienen a mano un poderoso arsenal argumental a favor de las ideologías revolucionarias. Les parece irresistible la idea de desplazar a los poderosos de siempre y controlar el poder, mientras se reorganiza la sociedad, se crean verdaderas oportunidades para quienes menos tienen y emerge un nuevo ciudadano. Al fin, la prosperidad, la justicia y la armonía tendrán base firme. Quienes enfatizan el orden como prioridad dirán que, a corto plazo, será inevitable utilizar mecanismos para combatir eficazmente los factores que, desde adentro o desde el exterior, conducen hacia la anarquía y atentan contra la existencia del Estado. No es posible negar la violencia social, ni la presencia de la subversión política, ni las amenazas a la soberanía nacional. Por su parte, quienes insisten en profundizar la democracia nos acosarán preguntando: ¿estamos dispuestos a sacrificar la libertad para garantizar la justicia social, de acuerdo con el parecer de un pequeño grupo de revolucionarios, o para asegurar la vida y la propiedad de los ciudadanos, confiando en el criterio de un grupo, también pequeño, cuyo objetivo es monopolizar el uso de la violencia?

Prestarle atención a las razones de quienes, desde sus ópticas particulares, escogen uno u otro sendero, es indispensable para comprender la circunstancia que vive el país. Despreciar una u otra opción porque expresa la ingenuidad revolucionaria, porque representa la vieja tendencia dictatorial latinoamericana, o porque constituye una nueva versión de la democracia blandengue, no contribuye a la reflexión y el diálogo. Es fácil afirmar que existen argumentos poderosos a favor de determinada posición y que no hay lugar para la duda. Los espíritus prepotentes, seguros de ellos mismos, que piensan así jamás considerarán puntos de vista distintos al suyo. Nunca reconocerán que, a fin de cuentas, cada posición exige tener fe en la validez de su análisis, más allá de cualquier consideración, de cualquier estadística o prueba histórica.



Alrededor de las tres opciones señaladas girará gran parte del debate público que los venezolanos viviremos en los próximos años. Estemos conscientes de que la salida del actual gobierno no logrará que la duda ante los tres posibles caminos siga acosando la mente de muchos. No nos engañemos creyendo que fue la demagogia revolucionaria lo que nos arrastró hasta esta encrucijada. A ella nos trajo la implacable historia. Hasta aquí llegamos como colectivo y ahora –también como colectivo– lucharemos para escoger la vía que creamos más conveniente, más viable, menos costosa. ¿Cuál será esa vía? Porque la conveniencia, la viabilidad y el costo son criterios que cada persona o cada grupo pueden definir de acuerdo con puntos de vista diferentes?

### **Las posibilidades de la democracia**

Los convencidos de que la libertad debe ser el eje de nuestro sistema político, y de que, a pesar de las frustraciones, la sociedad venezolana ha vivido un útil proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento de la democracia, apostamos a favor de este sistema político. En esto coincidimos quienes hemos participado en este libro. Lo que ha fallado no es el sistema que gira en torno de la libertad de expresión, el respeto a la voluntad popular, las consultas electorales, la transparencia administrativa, los contrapesos y controles de la gestión de gobierno, sino, más bien, la instrumentación a medias de todos estos elementos. Por tanto, la crisis de la democracia como sistema de gobierno puede ser explicada por su inadecuada adaptación a las particularidades de la realidad venezolana.

Varios ejemplos podrían ilustrar esta aseveración; baste, sin embargo, señalar uno particularmente elocuente: el caso de la descentralización político-administrativa. Por décadas, el país fue manejado desde un centro político todopoderoso donde se concebían soluciones a los problemas del país pensando en él como un todo homogéneo, sin hacer mayor esfuerzo para reconocer las diferencias regionales y locales que exigían respuestas también diferentes. Tampoco se reconoció la conveniencia de que los electores de municipios y entidades federales seleccionaran directamente sus gobernantes. Por largo tiempo, la desilusión de la población con la política y los políticos se expresó con el frecuente comentario «todos los políticos son iguales», aseveración que –lo sabemos– significa «los políticos son habladores de tonterías, ineptos y corruptos».

De esta manera, se reflejaba una profunda convicción que comenzó a ser negada, sin percatarnos de ello, un par de años después de la primera elección directa de gobernadores y alcaldes. Poco a poco, los ciudadanos comenzaron a decir «tal gobernador o tal alcalde no sirve», «este o aquel

gobernador o alcalde es muy bueno», «a Fulano lo reelegimos, a Zutano hay que revocarle el mandato». Teníamos una excelente noticia sobre la democracia venezolana. Los hechos demostraron la relevancia de la cercanía del gobierno a la población, y la eficacia de la acción pública en pequeñas escalas, en contraste con los macro sistemas que pretenden abarcar todo el país. Es más, pudimos observar el papel amortiguador y estabilizador de los gobiernos descentralizados en momentos de agudas crisis políticas nacionales, como las de 1992, 1993 y la actual.

Demasiado tiempo nos tomó percatarnos de la importancia de la descentralización. Todavía a unos cuantos líderes les causa inseguridad que estados y municipios tengan cierta autonomía para el manejo de sus asuntos y buscan otras formas de ejercer mayor control, recurriendo a subterfugios como la entrega tardía de recursos a quienes no entren por el estrecho aro político del Ejecutivo nacional.

La defensa de la democracia no puede basarse en falsas ilusiones. La democracia no garantiza soluciones automáticas a problemas como el orden y el desarrollo social y económico a corto plazo. Puede prometer respeto a la ley. Esta es su oferta esencial. Su eficacia como instrumento para atender problemas concretos, depende, en gran medida, de la eficacia en la práctica de la política. Y la política no es otra que cosa que luchar por el poder, influir, comunicar, negociar, llegar a acuerdos, resolver conflictos, liderar. Con pleno sentido de la realidad, es bueno reconocer que habilidades como éstas se ponen a prueba durante períodos de convulsión social. En esos tiempos, cuando las presiones de la población son difíciles de contener, las respuestas democráticas –las largas discusiones parlamentarias, por ejemplo– lucen lentas y débiles, y es tentador olvidarse de asuntos fundamentales del sistema político como la separación de poderes, la libertad de expresión y el derecho a disentir.

Para quienes nos empeñamos en darle una nueva oportunidad a la democracia, es asunto de vida o muerte identificar lo que debe hacerse para gobernar Venezuela eficazmente y asegurar la permanencia del sistema político que consideramos deseable. Cada cual tendrá sus recomendaciones favoritas, sin embargo tres lineamientos parecen tener especial relevancia para este propósito: atender el tema del orden, forjar ilusiones y administrar con sensatez. Estos tres lineamientos tienen carácter de condición necesaria, sea cual fuere la persona o el partido que gobierne y sea cual fuere el programa de acción.



En la Venezuela sitiada por nosotros mismos no podemos aceptar como algo natural o inevitable –a lo cual irremediablemente debemos adaptarnos– males como la inseguridad personal, la violencia política, la violación de la propiedad privada o la invasión del territorio por grupos armados. Ninguno de estos males puede ser tratado con desdén, argumentándose que son asuntos sin jerarquía intelectual, propios de policías o militares, indignos de ser discutidos cuando se habla de los grandes objetivos del desarrollo de los pueblos del mundo. Tenemos que reconocer que, en última instancia, la existencia del Estado se justifica en la medida que sea capaz de monopolizar la violencia y utilizarla, de acuerdo con normas compartidas ampliamente, para proteger a los ciudadanos y sus bienes, y defender el territorio nacional.

Preocupa que los malandros de los barrios asesinen, que la gente pague peaje para salir de su hogar o regresar a él, que los vecinos apliquen la pena de muerte, que las personas inviertan cada vez más para proteger su vida y sus bienes. Está en juego lo más elemental del orden social. Mal andamos si los ciudadanos se ven forzados a ejercer la violencia para defenderse. Esto es lo que significa el cierre de calles, el uso de guardaespaldas, la compra de armas para defensa personal o los linchamientos. Si se privatiza la violencia, el orden social se torna absolutamente frágil.

El deterioro del orden nos afecta a todos aunque, como tantos otros problemas del país, tenga un impacto mayor en los estratos de menos ingresos. Desde hace largo tiempo la gente de estos estratos sabe del cobro de peaje, ha visto amigos y familiares morir en manos de la delincuencia, ha sufrido la violación de derechos elementales por parte de las autoridades, mientras la sociedad dominante ha preferido ver para otro lado. Ejemplo dramático es la situación de las cárceles que, si a los hechos nos atenemos, sólo parece importarles a los prisioneros y sus familiares.

Para complicar las cosas, en los últimos años el problema del orden ha sufrido una transformación radical con el surgimiento de la violencia política. El uso de la fuerza física se instaló como expresión del enfrentamiento entre bandos que luchan por el poder. El gobierno ha sido acusado de armar a sus simpatizantes, lo que enardece a la oposición que se siente cada vez más acosada por un gobierno revolucionario que muchas veces ha declarado su intención de exterminar social, económica y políticamente a quienes no compartan su ideología justiciera. Es más, ese gobierno ha manifestado públicamente su simpatía con los movimientos revolucionarios de otros países, lo que, con o sin intención, lo aproxima a grupos que utilizan el terrorismo como instrumento de lucha política. De esta manera, nos aproximamos al submundo del mercado ilícito de armas, de las mafias, el narcotráfico y

el terrorismo. Imaginémonos lo que puede ocurrir en un país con un Estado débil que es penetrado por estas fuerzas de por sí difíciles de controlar (Naím, 2003).

Los problemas del orden referidos al control de la violencia reflejan claramente la debilidad general del Estado venezolano. Esa debilidad se manifiesta, de manera patética, en la incapacidad de las organizaciones públicas para hacer que los funcionarios cumplan las normas. Es el caso, por ejemplo, del inveterado incumplimiento de leyes y reglamentos en planteles educativos y en centros de salud. Los estudios sobre liceos y hospitales señalan el abuso de los cargos, la anarquía y la carencia de autoridad efectiva por parte de quienes desempeñan funciones de dirección. Se desconocen o no se da importancia a estos problemas de orden que llegan hasta la violación de principios básicos de la convivencia social. Que los directores de los liceos sean irrespetados, que los profesores no den clases sin justificación alguna, que alquilen los cargos para ocuparse de asuntos más lucrativos y no perder beneficios como la jubilación, que en los hospitales se hurten equipos, que ni siquiera los estetoscopios propiedad de los médicos estén seguros, que los profesionales «cabalguen» horarios, son conductas que no pueden tratarse como detalles anecdóticos sin importancia.

No iremos muy lejos con programas de gobierno bien concebidos, ayudas internacionales, partidos políticos que aglutinen pareceres, ideologías inspiradoras o líderes carismáticos si, como colectivo, no nos hacemos fuertes para defender valores y normas centrales como el respeto a la vida, y no contamos con un Estado capaz de hacer valer su autoridad.

Si la sociedad es débil para hacer cumplir sus normas más importantes y si el Estado carece de fuerza, ¿por dónde comenzar para resolver tan grave problema? Esta pregunta es crucial cuando se piensa en un gobierno para los próximos años, porque hay suficientes razones para temer una anarquía social creciente. Por lo traumático que es reconocer este peligro, evadimos discutirlo. Una manera de hacerlo, con cierta eficacia, consiste en afirmar que la paz social, la armonía y la seguridad personal regresarán con el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Tal razonamiento que, ciertamente, expresa parte de la verdad, no puede ser utilizado para evadir la necesidad de tomar medidas urgentes que garanticen el orden esencial.

De dura y mala manera el tema del orden impondrá su presencia. No va a ser fácil evadirlo. Va a constituir el tema eje de las preocupaciones de la sociedad venezolana. Posiblemente es la preocupación que una a todos los venezolanos, porque es el único mal compartido por todos. En este hecho radica su trascendencia política.



#### LA NECESIDAD DE FORJAR NUEVAS ILUSIONES

El ánimo de un importante sector de los ciudadanos está deshecho. La frustración ha cundido en demasiada gente para no prestarle atención: en los estratos medios que perdieron su empleo en una empresa privada o en una oficina pública; en pequeños empresarios que tuvieron que cerrar su negocio; en inmigrantes de hace cincuenta años, cuyos hijos decidieron probar suerte en el país de origen de sus padres; en buhoneros que ni siquiera compensan con sus ventas lo que gastan en transporte para trasladarse al sitio donde comercian.

Ese espíritu maltrecho tiene que ser transformado. La desesperanza, que no es buena consejera en la vida de las personas, tampoco lo es en los pueblos. Estemos conscientes de que, si bien la salida de Chávez significará para muchos un profundo alivio, será insuficiente para crearle a los venezolanos un entusiasmo duradero. El antichavismo radical sentirá que lo peor ha pasado y que la desaparición del líder revolucionario como presidente es, de por sí, noticia suficientemente buena para crear el mayor optimismo en la población. Es probable que el cambio de gobierno alegre gran parte del país, pero esa alegría no la sentirá con particular intensidad la gente de los estratos sociales de menos ingresos. Los mismos estratos medios y altos corren el riesgo de perder el entusiasmo inicial si no aprecian que el rumbo del país ha virado ciento ochenta grados hacia tiempos sensiblemente mejores. La población en general, aunque muy especialmente quienes menos tienen, necesitará algo más que la salida de Chávez para que renazca su optimismo. Ese algo hay que crearlo.

Los ciudadanos necesitan razones positivas para apoyar una iniciativa política, respaldar a alguien y votar de determinada manera. No basta con la motivación negativa, es decir, el deseo de eliminar lo insatisfactorio de un estado de cosas. Principios abstractos como la democracia y la libertad, cuya defensa ha sido la principal bandera de la oposición, carecen de sentido, particularmente para quienes la prolongada precariedad de su situación no les permite preocuparse de asuntos que no dan respuesta clara y directa a las penurias cotidianas. Además, la historia de promesas incumplidas es tan larga que, irremediabilmente, esos principios son fácilmente relegados a la jaula de los «periquitos preñados».

El país necesita ilusionarse con el futuro, creer que el mejoramiento de las condiciones de vida es factible, que todos, de algún modo, nos hemos de beneficiar y que todos participaremos en la construcción del país. Sin la ilusión de un mañana mejor, no será posible gobernar Venezuela, al menos no en un régimen de libertades. La acumulación y enorme variedad de problemas, a lo que se suma la creciente impaciencia de la población y la ve-

hemencia de sus demandas que, como señalaremos más adelante, configura un cuadro de desestabilizadora hipermovilización, torna gigantesco el reto de gobernar.

La gente necesita algo en que creer y no sólo alguien en quien creer. El chavismo le ha dado ese alguien –Chávez– y ese algo –la revolución bolivariana– a parte de la población, como, en otro momento de la historia nacional, Acción Democrática le dio al país el liderazgo de Rómulo Betancourt y la ilusión de una democracia que se ocuparía de las necesidades de los obreros y los campesinos y pondría a valer la clase media.

¿Quién ofrece qué ahora? Esta pregunta inquieta porque sabemos que la respuesta nos deja un desagradable vacío: nadie. Hasta ahora, el liderazgo de la oposición no ha trascendido la oferta de un revocatorio y, si Dios quiere, de unas elecciones nacionales. Este vacío de propuestas lo capta el pueblo y lo hace más escéptico.

La ilusión que hay que forjar debe tener raíces en la gente. No se trata de inventar un producto de laboratorio que ha de ser encasquetado al pueblo mediante argucias publicitarias. Nada artificial sirve de mucho a largo plazo. Tarde o temprano la gente descubre el truco, se desilusiona y se generan crisis políticas. Es fácil vender un candidato presidencial mediante las maquinarias partidistas y el uso intensivo de los medios de comunicación. Eso se ha hecho unas cuantas veces. Pero si lo que se propone carece de raigambre popular –es decir, que sea significativo para las mayorías porque responde a sus necesidades, porque reconoce su realidad, porque no contradice sus creencias– cuando se apague el entusiasmo electoral se perderá el interés de los ciudadanos y se ganará su rechazo.

Podemos crear ilusiones duraderas si tomamos como punto de partida el venezolano real y no el que creemos que es o el que deseamos que sea. Es indispensable reconocer, por ejemplo, la importancia de la «conviabilidad», ese énfasis radical en las relaciones con los otros como parte de la concepción de uno mismo, típico –según autores como Moreno (1997)— de la sociedad popular. Hacerlo facilitaría la promoción de la participación de la población en causas como el mejoramiento de los planteles educativos y los servicios de salud, y en la misma creación de movimientos políticos con arraigo popular. El Programa de hogares y multihogares de cuidado diario lo hizo implícitamente, al apoyarse en las orientaciones hacia la ayuda mutua que existen en las comunidades populares (González de Piñango, 1998). Del reconocimiento del «convive» como rasgo clave de la cultura de esa sociedad, pueden surgir conceptos, palabras y explicaciones que integren un discurso compartido entre estratos sociales tradicionalmente separados de manera mucho más radical de la que somos capaces de reconocer.



El surgimiento de ese discurso ha enfrentado como obstáculo el empeño de las élites en señalar supuestas perversiones de la percepción del pueblo sobre su realidad. Así, en tiempos recientes, algunos forjadores de opinión insisten en la necesidad de corregir la percepción equivocada que el pueblo tiene de Venezuela como país rico. ¿Por qué no se trata de entender la razón de tal parecer aceptando que es fácil percibir el país de esa manera cuando la distribución del ingreso está tan dramáticamente sesgada a favor de una pequeñísima proporción de la población? Sirva esta pregunta para plantear que la creación de nuevas ilusiones exige crear explicaciones, también novedosas, compartidas por todos, puntos de encuentro en la conversación sobre el país. No se trata de que, por su poder económico, su nivel de educación o su control de los medios, los sectores dominantes, con hábil condescendencia, le pinten pajaritos en el aire a los sectores populares.

Estamos hablando de una nueva narrativa que explique la realidad y despierte la imaginación sobre el país posible. Esto fue lo que logró el movimiento democrático después de la caída del presidente Medina en 1945. Ese movimiento logró concebir grandes metas nacionales, tan diferentes como la nacionalización de la industria petrolera y la expansión del sistema educativo, compartidas por amplios sectores del país. La nueva narrativa tendrá que ser diferente a la utilizada por Hugo Chávez; de no ser así, lo que irremediablemente tendremos será un remedo que a nadie convencerá.

Por el escepticismo con que la población percibe a los políticos y sus partidos, las nuevas ilusiones tendrán probablemente corta vida, y quien gobierne dispondrá de escaso tiempo para mostrar resultados tangibles. La gente evaluará el desempeño de los políticos y de la misma democracia utilizando como vara la máxima «obras son amores y no buenas razones». Que no salgan por ahí algunos filósofos argumentando que las democracias se justifican por sus principios, no por sus logros y que, por tanto, tenemos que enseñarle a la gente a creer en ellas a pesar de los errores y la incompetencia de los gobiernos. Que tampoco aparezcan los expertos en ajustes económicos imponiéndole enormes sacrificios a la población porque «sólo así tendremos un país mejor». No puede negarse que es prudente y posible exigirle paciencia a la población pero, responsablemente, debemos estar conscientes de que cuanto más paciencia y sacrificios exijamos, mayores serán los riesgos políticos en los cuales incurriremos. Esos riesgos se refieren al posible surgimiento de la protesta anárquica o la imposición del orden a la fuerza. No podemos, entonces, incurrir nuevamente en la equivocación de concebir las políticas públicas como secreter, con una gaveta para lo político, otra para lo económico, otra para lo social..., gavetas que se encargarán de abrir los respectivos especialistas.

¿Qué hacer en un lapso relativamente breve para apuntalar las nuevas esperanzas con pronto logros? Podríamos –por ejemplo– constituir el empleo y la vivienda en ejes de una terapia de choque positivo, cuya rápida instrumentación exige creatividad, capacidad de gestión y temple político. Esto permitiría ganar tiempo mientras se estabiliza la situación política y social. En definitiva, forjar nuevas ilusiones es una tarea que deben acometer los movimientos políticos, pero quienes asuman la tarea de gobernar luego del actual gobierno tendrán que ganar credibilidad atendiendo necesidades perentorias de la población. Empleo y vivienda son dos de ellas.

Si algo nos debe caracterizar en estos tiempos es el mayor realismo para reconocer las necesidades del país, tanto materiales como psicosociales; espirituales, si se quiere. Los acuerdos políticos y los buenos programas de gobierno son indispensables, pero será difícil remontar la empinada cuesta que tenemos por delante si no logramos ilusionarnos con la idea de un mejor futuro posible, de que hay luz al final del túnel.

#### **LA REVOLUCIÓN DE LA EFICACIA Y LA SENSATEZ**

Contamos con una vastísima experiencia, de necesaria consideración si queremos escapar, ¡por fin!, del infierno de repetición de errores al que el deprecio del pasado nos ha condenado. Unas cuantas son las lecciones derivables de políticas, planes, programas y proyectos, de naturaleza muy diversa que, por larguísimo tiempo, hemos tratado de llevar a la práctica. Al revisar la experiencia de distintos gobiernos, cada cual derivará sus propias lecciones de todos esos esfuerzos, muchos de ellos realizados por venezolanos con la mejor formación, responsables y diligentes, cosa que es prudente recordar para que nadie se engañe tratando de explicar los errores o la falta de progreso por la carencia de gente preparada y trabajadora. Ejemplo emblemático es el planteamiento de los fondos de estabilización con el propósito de aprovechar los altos ingresos de los tiempos de bonanza petrolera para compensar su caída en tiempos de vacas flacas. Esa idea, que en los noventa se presentó como novedoso producto de la creatividad tecnócrata, ya había sido utilizada, con éxito, hacia finales de la segunda década del siglo pasado, por el ministro de Hacienda Román Cárdenas con el fin de aprovechar los precios favorables del café y el cacao en los mercados internacionales y proteger el presupuesto nacional ante una eventual depresión de los mercados, cosa que ocurrió poco tiempo después.

Si observamos el pasado con los ojos del sentido común, varias son las enseñanzas que podríamos aprovechar para orientar la acción del gobierno (Piñango, 1998). Conviene señalar algunas de ellas, sin hacer referencia a programas de gobierno específicos porque el interés es destacar algunos



lineamientos sobre cómo debe realizarse la gestión gubernamental independientemente de los objetivos que quieran alcanzarse.

#### **LA NECESIDAD DE SIMPLIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PAÍS**

La debilidad del Estado venezolano, dramáticamente patente por su pasmosa ineficiencia, es agravada por una maraña normativa indebidamente detallista, que ni siquiera le permite llevar correctamente el registro del parque automotor nacional. Tal enmarañamiento hace difícil diseñar y realizar una acción efectiva para enfrentar los problemas del país. El enredo de la administración pública la ha convertido en un pesado y lento elefante, que somos incapaces de domesticar y por eso desconfiamos de él. Los organismos públicos parecen tener voluntad propia, incontrolable por los gobernantes quienes, con frecuencia, se sienten amarrados para cumplir con sus responsabilidades. El deterioro administrativo ha alcanzado el punto en que pagar las quincenas a los funcionarios y tramitar unos viáticos son tareas difíciles de realizar en muchas organizaciones públicas. A pesar de todo ello, sigue entronizada la idea de que se precisa de más normas para evitar que los inescrupulosos se salgan con las suyas. Y a más normas, mayor el enmarañamiento y mayor la ineficiencia. Esta realidad administrativa indica la urgencia de simplificar el funcionamiento del país.

La simplificación del país tiene implicaciones diversas: trabajar en escalas pequeñas, evitar la creación de inmensos y complejos organismos, descentralizar, hacer leyes que establezcan lo fundamental sin entrar enfermizamente en detalles, asignarle pocas funciones a las organizaciones públicas, establecer metas concretas alcanzables en plazos razonables y contar con sencillos indicadores de gestión accesibles a amplios sectores de los ciudadanos. Los ejemplos abundan: el sistema de educación superior es inmanejable por un consejo de cuarenta miembros; el presidente de la República no puede oír cuenta a más de diez ministros; es conveniente que los alcaldes duren cuatro años en sus funciones; los directores de las escuelas y liceos deben ser capaces de nombrar y remover su personal; los hospitales públicos deben concentrarse en servicios de alta demanda y la atención especializada, de menor demanda, puede prestarse en instituciones privadas, aun cuando los servicios sean pagados por el Estado.

La simplificación de sistemas administrativos exige flexibilidad y disposición para probar esquemas de organización diferentes; aceptar, por ejemplo, que los servicios de salud, las escuelas y los liceos no tienen que ser estructurados y administrados idénticamente en todas partes. La privatización de empresas y organismos públicos constituye una manera de hacer las cosas más sencillas, y cada organización privada puede tener su modo

particular de «matar pulgas», siempre y cuando cumpla con sus objetivos de acuerdo con las normas. En algunos casos, se requerirá un esfuerzo de «deslegislación». Sin modificar la ley que rige el sistema educativo, por ejemplo, no será posible que los niños y jóvenes del país tengan un mínimo de doscientos días de clase al año. De igual modo, la ley de salvaguarda del patrimonio público deberá ser modificada para darle a los funcionarios mayor capacidad de movimiento y crear un clima de trabajo menos paranoico. Un sistema administrativo no puede operar basándose en el supuesto de que todos los funcionarios son corruptos.

#### **TENER CLARAS LAS PRIORIDADES**

Los economistas dicen que los recursos son escasos, y la práctica enseña que, usualmente, son más escasos de lo que parecen. La escasez no es sólo de dinero, sino también de tiempo, personas preparadas y capacidad para ejercer la autoridad. No es mucho lo que puede realizarse en cinco o seis años de gobierno; por lo tanto, hay que preguntarse qué es lo más viable y de mayor impacto a largo plazo, pero cuyos resultados pueden comenzar a verse en un lapso relativamente corto. Es irresponsable atender nada más lo que parece urgente porque hay que mostrar logros para obtener apoyo político; pero es ingenuo, y también irresponsable, centrar la acción en el largo plazo sin ocuparse de las exigencias del presente. Como señalamos, porque apremian las necesidades y galopa el escepticismo de los ciudadanos, es perentorio dar alguna prueba de que las cosas han comenzado a cambiar. Nadie duda de que el país debe contar con un sistema nacional de salud eficiente, pero los enfermos de la población de menores recursos requieren que, pronto, algunos centros asistenciales presten servicios indispensables con un mínimo de eficiencia.

Los logros en unos ámbitos crean esperanzas en otros, aun cuando no tengan relación directa alguna. Ese puede ser el caso de la Oficina de Identificación y Extranjería, de la condición de las vías públicas, del funcionamiento de una minúscula parte de los servicios de salud. Al demostrarse capacidad para actuar rápidamente en las emergencias, al lograr que los ciudadanos sean bien tratados cuando tramitan sus cédulas o pasaportes, hacerle mantenimiento a calles y carreteras, o mejorar el servicio de siquiera un reducido número de hospitales, se puede contribuir significativamente a elevar las esperanzas de la población y la credibilidad del gobierno.

Los grandes problemas —educación, salud y seguridad, por mencionar áreas de innegable importancia y alta presión política— pueden ser atendidos «por parte», trazando metas cuyo logro demuestre que hay capacidad para gobernar. De nuevo, es indispensable fijar prioridades y, al hacerlo, identificar



lo que puede tener mayor efecto multiplicador, aunque se trate de algo concreto y relativamente fácil de resolver. Que se analice cada área de acción para tomar decisiones que convenzan al equipo que ha de gobernar. Como ejemplo, considérese que la política social podría concentrarse en la generación de empleo, la lucha contra la inflación, un contundente programa de vivienda, mayor seguridad personal, un centro hospitalario decente en cada estado, un año escolar de al menos doscientos días y una jornada escolar completa (mañana y tarde). Obsérvese que, de acuerdo con esta orientación, la política social no se limita a los llamados «programas sociales compensatorios» —atención a la madre y el niño, pasaje estudiantil, beca escolar, etc.— que se justifican para atender urgencias o carencias graves, pero que son de menor impacto relativo en la transformación de una sociedad. Obsérvese también que los objetivos propuestos tienen la ventaja de ser prácticamente tangibles, lo que los hace comprensibles por gran parte de la población y, en consecuencia, de más fácil evaluación por los especialistas y los ciudadanos.

Los planes de gobierno esbozados —algunos de ellos trabajados con seriedad— abarcan demasiados aspectos y no dejan claras las verdaderas prioridades, es decir, aquellos asuntos, sin duda importantes, que habrá que postergar porque compiten con otros absolutamente indispensables, y el tiempo disponible, los recursos y la capacidad de gestión son escasos para dispersar los esfuerzos.

#### ***PENSAR SIEMPRE EN EL «CÓMO»***

La discusión pública sobre el desarrollo nacional se centra prácticamente en las metas y, en verdad, existe amplio consenso sobre cuáles de ellas vale la pena alcanzar. Todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en mejorar los servicios públicos, pero al tratar de definir las maneras de hacerlo emergen las discrepancias; hay quienes apoyan su privatización y quienes opinan que privatizar equivale a «vender el alma al diablo». A pesar de la acalorada discusión que a veces generan esas diferencias, la mayor dificultad no radica en las divergencias sobre las metas o las grandes políticas que han de seguirse sino, más bien, en que, con frecuencia, los medios propuestos para alcanzar los objetivos están tan lejos de ser utilizados con efectividad que prácticamente pueden ser considerados irreales. Tan enraizada aproximación a la solución de los problemas del país conduce a pensar que los proponentes de políticas, planes o proyectos parecieran estar planteando convertir —sin darse cuenta—, de la noche a la mañana, un país atrasado en un país desarrollado.

La tan mentada como anhelada coordinación ilustra la existencia de este síndrome de los medios utópicos. Una y otra vez se plantean planes, pro-

gramas o proyectos que exigen, como condición necesaria para su ejecución, un alto nivel de coordinación entre diferentes organismos públicos e, incluso, entre estos y organizaciones privadas. Parece olvidarse que si algo caracteriza un sistema administrativo eficiente, propio de un país desarrollado, es la capacidad para coordinar sus componentes; luego, no podemos esperar que un sistema administrativo deficiente sea capaz de coordinar. En nuestra administración pública no puede presuponerse la existencia de la coordinación, ni tampoco que ella se logre por mandato legal, o por voluntad política, razón por la cual es insensato diseñar complejas acciones de gobierno que la exijan como condición necesaria para el éxito. Presuponer que la coordinación existe, o que se alcanza fácilmente, es desconocer el comportamiento de la administración pública y condenar las acciones al fracaso desde su misma concepción.

#### ***CREAR UNA BUROCRACIA SÓLIDA***

Cuando se habla de las deficiencias del Estado venezolano, las quejas se refieren con frecuencia a la falta de preparación de los funcionarios, al desorden administrativo que ni siquiera le permite llevar buenos archivos, al caprichoso comportamiento de los funcionarios, a la escasa capacidad para instrumentar las decisiones —lo que incluye la falta de continuidad administrativa— y, por supuesto, la tan denunciada corrupción. No es exagerado decir que, en buena medida, estos males son consecuencia de la pobre atención que se le ha prestado al desarrollo de una burocracia pública. De hecho, muchos observadores del aparato administrativo público sentimos que, desde hace largo tiempo, este sufre de un agudo deterioro.

Hay que decirlo de modo taxativa: no hay manera de alcanzar la elusiva condición de país desarrollado sin una administración pública que opere con un mínimo de eficiencia. Ni el liderazgo político, ni políticas públicas bien concebidas, ni la formación gerencial de una élite de tecnócratas puede llenar el vacío de un pobre sistema de organizaciones públicas. Alguien tendrá de ocuparse de hacerlo si la intención es avanzar sostenidamente hacia niveles más altos de desarrollo. A punta de inspiración, expertos, audacia, operativos y dinero se puede impresionar a la gente por un tiempo, pero no lograr resultados duraderos.

Para avanzar por el enrevesado camino del fortalecimiento de la administración pública, la experiencia y el sentido común recomiendan seguir la estrategia de guerras en pequeñas escalas y no de una guerra total. Las reformas globales de todo el sistema administrativo del Estado terminan en inmensas frustraciones. La opción de guerras limitadas, comenzando por áreas en las cuales es más probable el éxito, tiene como fundamento la



necesidad de crear un impulso autogenerador de cambios mediante la demostración, ante los ojos de muchos, de que el mejoramiento administrativo es posible y beneficioso. El éxito engendra el éxito. Piénsese en el impacto que tendría mejorar progresivamente la eficiencia de las organizaciones públicas, tal vez lentamente pero a paso seguro. Digno de reconocimiento es el avance de algunas regiones y unas cuantas municipalidades, sin haber pretendido realizar transformaciones milagrosas, a pesar de la escasez de recursos y los conflictos políticos con el poder central. Es vasto lo que podemos aprender de nuestra propia experiencia.

**ADMITIR QUE GOBERNAR ES EL ARTE DE HACER LO QUE SE PUEDE DE LA MEJOR MANERA POSIBLE**  
Cuando se gobierna no se hace lo que se quiere sino lo que se puede. Dicho en forma más positiva: se hace lo que se quiere como se puede. La acción de gobernar es, inevitablemente, parcial y ocurre en el tiempo. El gobierno tiene la posibilidad de manejar sólo un número limitado de variables, y no es raro que, en momentos decisivos, no pueda controlarlas. Es más, lo que no se controla, o simplemente el transcurrir del tiempo, puede distorsionar, en uno u otro sentido, los efectos buscados. Por ello, con frecuencia carece de sentido emitir juicios concluyentes en plazos muy limitados. ¿Quién iba a predecir en los años setenta que Sidor llegaría a ser un desastre y no quedaría otra salida que privatizarla? ¿Quién iba a pensar en 1975, en medio de la euforia de la nacionalización petrolera que, a finales de los noventa, se estaría discutiendo la necesidad de privatizar la principal industria del país y, mucho menos, que en el 2003 Pdvsa sería zona de desastre? Así es la vida de los países (Piñango, 2003).

La acción de los gobiernos está siempre sesgada hacia algunos aspectos: se atienden unos más que otros. Se intenta hacer las cosas bien, pero no siempre se obtienen los resultados esperados. Gobernar es actuar en medio de desequilibrios y contradicciones (Hirschman, 1964), haciéndose lo que se puede, adaptándose a obstáculos, muchas veces impredecibles; redefiniendo algunos objetivos, abandonando o postergando otros para alcanzar metas que se consideran cruciales; todo ello con el reconocimiento de que la idea es avanzar, echar hacia delante, convencidos de que, si se ha escogido la vía correcta, las cargas se enderezarán en el camino. Además, no es de extrañar que surjan dilemas inevitables cuando dos objetivos, igualmente relevantes y atractivos, se contraponen y es preciso optar por uno de ellos. Como ilustración pertinente en estos días, recuérdese que cuando se propone el control de cambio para evitar la fuga de capitales, se olvida que tal medida, además de generar más desconfianza y pesimismo, atenta contra el objetivo de hacer crecer la economía. Estos hechos subrayan la relevancia de contar con prioridades y orientaciones claramente definidas, aunque la dirección pueda cambiar sobre la marcha.

A muchos espíritus preocupados por la magnitud de los problemas les puede parecer excesivamente conservadoras estas consideraciones sobre la capacidad de gestión de los gobiernos, sobre todo después de tantos años de búsqueda de transformaciones a fondo, de tanta retórica revolucionaria. Es comprensible esta apreciación. Sin embargo, quienes predicán cambios radicales deben considerar lo que hemos dejado de progresar en países como Venezuela por andar tras fórmulas de cambio acelerado, sin prestarle atención a la efectividad de la acción pública que, como ya señalamos, ha caído notoria y sistemáticamente desde hace unos cuantos años. El daño causado por esta desorientación ha sido muy grave en muchos aspectos. Allí está lo ocurrido en la educación primaria con la llamada «reforma integral de la educación». Con tal reforma, que pretende abarcar todo lo deseable, perdimos la brújula de las prioridades, y la enseñanza de destrezas clave como la lectura y la escritura sufrió en la práctica al tener que competir con muchos otros contenidos considerados fundamentales por la idea de educación integral.

#### **PRESTARLE ATENCIÓN AL PARECER DE LA GENTE**

Nada nuevo tiene el tema de la participación de la gente en la orientación del rumbo de una nación. Este es un tema fundamental de las ciencias políticas aunque se exprese con otros términos. La participación de los ciudadanos en la formulación y toma de decisiones y en la misma implantación de planes, programas y proyectos fue planteada en la Venezuela de los sesenta por diversos grupos de gobierno y oposición. De la Oficina Nacional de Coordinación y Planificación (Cordiplan) se difundieron unos cuantos documentos al respecto. Era un tema popular en los círculos progresistas de la época (Ravell, Piñango y González, 1969). Incluso, en 1969 se llegó a crear un programa de participación popular. El desiderátum era que la población no quedara al margen de lo que sobre ella se decidía y podía afectarla. Los mismos organismos multilaterales mostraron su entusiasmo por esquemas de gestión pública que fueran participativos.

Ese énfasis en la participación se esfumó paulatinamente de la retórica técnico-política del país para luego reaparecer de otro modo, vinculada esta vez a la retórica de la democracia protagónica tan cara para el actual gobierno. Ni en los años sesenta o setenta ni en estos días al tema de la participación se le ha dado contenido práctico. La explicación puede estar en las perturbaciones que la participación de la gente crea a la acción de los políticos y los tecnócratas. Para los políticos, la participación es extremadamente exigente y riesgosa, porque complica la dinámica del poder al envolver más actores de conducta imprevisible. Para los tecnócratas introduce factores que, des-



de su punto de vista, incrementa la ineficiencia, porque hace más lentas las decisiones y su puesta en práctica.

Si las líneas de acción sugeridas en este capítulo y en los que lo preceden suenan excesivamente a una manera de formular y poner en práctica acciones políticas y de gobierno «de arriba hacia abajo» es porque quienes hemos trabajado en este libro estamos atrapados en este viejo esquema. Nos pasa lo mismo que a muchos que desearían ser parte de democracias más participativas. Nuestro deseo está claro, podemos reconocer experiencias concretas de participación pero no conocemos experiencias de profunda y amplia participación en países como Venezuela. De ello hay que estar consciente para ser leales con los lectores, de quienes esperamos comprensión y suficiente sentido crítico para no dejarse engañar por la demagogia política que usa el discurso de la participación como argucia para imponer pareceres y líneas de gobierno.

En medio de las complicaciones de los tiempos actuales, que exigen acciones inmediatas en muchos ámbitos, podemos exigirnos, al menos, dos cosas: por una parte, estar conscientes de la tendencia a actuar desde nuestra posición de élites con más poder que ese «otro social» con menos recursos, menos influencia, menos educación; por otra, preocuparnos y ocuparnos de conocer el punto de vista de ese sector social. Ambas cosas constituirían un claro avance hacia una mejor democracia.

La participación de la gente en los procesos políticos es mucho más compleja de lo que ciertas concepciones románticas suponen. La experiencia demuestra que la disposición a participar no es tan profunda y amplia como algunos creen. Si los políticos existen es, precisamente, porque los colectivos optaron por asignarle a algunos actores sociales la representación de sus pareceres e intereses. Eso no significa que la gente se olvide para siempre de lo que ocurre en su entorno social. Hay sectores de la población pendientes de lo que hacen quienes deciden por ellos y, ante desacuerdos en materias importantes, pueden emerger con grandes y despiadadas protestas. Esta es una razón práctica para ocuparse del parecer de los representados. Si ello es verdad en tiempos de serenidad social y política, mucho más lo es en épocas de turbulencia, cuando las sociedades se hipermobilizan.

### **El reto de la hipermobilización**

Resultado del proceso político vivido desde 1998 es el despertar del interés de la población en la política y los asuntos colectivos. Así lo demuestran las concurridas marchas, los cacerolazos, la recolección de firmas para referendos, la proliferación de programas de opinión, el surgimiento de nuevos actores, la transformación de periodistas en estrellas o héroes populares, la

politización de Pdvsa, la presencia de las organizaciones no gubernamentales, el incremento de las invasiones a tierras privadas o públicas, la toma de sectores de las grandes ciudades por los buhoneros. El país vive una coyuntura de intensa movilización social y política, consecuencia, en buena parte, del discurso de quienes gobiernan, que gira en torno de una transformación revolucionaria de la sociedad —el gobierno se autodenomina «revolucionario»— y de la reacción opositora que percibe la acción oficial como esfuerzo de imposición hegemónica de una ideología.

La polarización de la lucha política en dos bandos constituye la fuente del renovado interés de ciudadanos de distintos estratos sociales por participar, de una u otra manera, en la expresión de sentimientos y opiniones políticas, o en la orientación de las decisiones que los pueden afectar. La gran mayoría de la población se limita a la manifestación de sus sentimientos o pareceres. Como siempre, involucrase en la política, en cualquier nivel de formulación e instrumentación de decisiones, es asunto que tiende a reducirse a un grupo que, si consideramos el vasto número de ciudadanos que expresan sus pareceres, puede parecer relativamente pequeño, aunque grande, si hacemos comparaciones con otras épocas de la vida nacional.

La sociedad venezolana está más dada ahora a la protesta, a la comunicación de sus insatisfacciones y al planteamiento directo de sus exigencias. Pocos analistas negarían la validez de esta afirmación. Muchos coincidirían en que las manifestaciones de protesta muestran una creciente impaciencia. Arrastramos un viejo descontento que no ha encontrado respuesta efectiva a insatisfacciones con asuntos tan diversos como los deficientes servicios públicos, el incumplimiento de promesas laborales, el desempleo, la escasez de vivienda, la inseguridad personal, las condiciones inhumanas de las cárceles, las injusticias de la justicia y la arbitrariedad de los funcionarios.

Obsérvese que la insatisfacción, el descontento y las exigencias tienen como blanco el Estado como un todo y no sólo el poder Ejecutivo. Ese Estado centralizador muy deficiente está sometido, con fuerza cada vez mayor, a las demandas de una ciudadanía cuya paciencia parece haberse agotado. Responder esas demandas constituirá el reto más importante del próximo gobierno del país. Por un tiempo, el gobierno actual ha logrado lidiar con la insatisfacción de la población —al menos de la población de menos recursos— mediante un discurso revolucionario en cuyas promesas hay que tener fe. El carisma del presidente Chávez le ha sido de mucha utilidad en este sentido. Para la oposición, el reto consiste en hacerle ver a la gente la posibilidad de tener un gobierno democrático capaz de mejorar la calidad de vida y de responder a sus expectativas.



El país está políticamente movilizado. Ante este hecho, una reacción puede ser tratar de frenarlo por el temor a que pueda desbocarse y provocar conductas indeseables como los saqueos, dado que la constante manifestación de exigencias y las protestas complican gravemente la tarea de gobernar. Sin embargo, no será fácil frenar la movilización. Tratar de halar las riendas puede ser un error. Mejor respuesta es canalizar esa energía hacia proyectos útiles e inspiradores, como podría ser «vivienda para todos» o, simplemente, políticamente motivadores como «devolverle el nombre al país». Cualquiera línea que se escoja pondrá a prueba las habilidades de los gobernantes para manejar la tendencia hacia la hipermovilización. Los músculos para exigir y protestar están recrecidos, pero hoy carecemos de los mecanismos usuales para encauzar esta fuerza. La debilidad de los partidos políticos constituye la mejor ilustración de esta realidad. Ante la presión de la población, esa debilidad crea distorsiones como la politización de los medios, la Iglesia, las empresas, las universidades, los gremios, la Fuerza Armada, entre tantos otros ámbitos institucionales.

### **La urgencia de contar con árbitros creíbles**

Si el genio de la lámpara de Aladino se nos apareciera y nos dijera que nos va a conceder un deseo, sólo un deseo, en relación con la situación actual del país, ¿qué le pediríamos? Obligados a responder en forma concreta, algunos no dudaríamos: contar con árbitros creíbles. Por «árbitros» entendamos específicamente el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo.

A los árbitros les podemos atribuir la mayor importancia por la fuerza que ha cobrado el conflicto social. No contamos con árbitros porque quienes están a la cabeza de los organismos señalados no gozan de credibilidad por parte importante de la población. Esta carencia los descalifica e incapacita para desempeñar sus funciones, especialmente cuando las querellas o discrepancias se refieren a materias graves como la responsabilidad en la muerte de ciudadanos por motivos políticos. No estamos hablando, entonces, de simples desencuentros por razones ideológicas.

La ausencia de árbitros respetados por diferentes sectores políticos constituye el más grave síntoma de la debilidad institucional del país. Esa debilidad explica fenómenos desconcertantes como la enorme presencia de los medios de comunicación social en asuntos públicos. Acusar a los medios de entrometidos, por tomarse atribuciones que no les corresponden es –por decir los menos– simplista. Si los medios actúan como jueces que procesan, juzgan y condenan es porque otros no están haciendo su trabajo, o porque la comunidad no confía en cómo lo hacen.

La «intromisión» de los medios es consecuencia del vacío institucional que sufre el país. Hay un conjunto de necesidades sociales –políticas, en este caso– que no son atendidas por quienes les corresponde hacerlo, razón por la cual son asumidas por sectores, organizaciones o grupos que existen para desempeñar funciones diferentes de las que parecen usurpar. Lo mismo podría decirse de los cuadros profesionales de la industria petrolera estatal, que se han convertido en uno de los ejes más relevantes de la oposición al actual gobierno. De nuevo, sería desacertado acusar a esos profesionales de usurpadores de las funciones de los partidos políticos, cuando éstos no realizaron –por la razón que sea– su trabajo como mecanismos transmisores de demandas o exigencias de un sector social a quienes toman las decisiones.

Otro ejemplo, tan significativo como el de los empleados de la industria petrolera son los militares. La Fuerza Armada se encuentra bajo fuerte presión por parte del gobierno y la oposición para que actúe a favor de uno u otro bando en la lucha política. Mientras menos se confíe en instancias como el Tribunal Supremo o el Consejo Nacional Electoral, mayor será esa presión y más dependeremos de los militares para solucionar nuestros grandes desacuerdos políticos.

La situación venezolana es delicada porque la aguda pugnacidad que sufrimos tiene como uno de sus polos al gobierno nacional, cuyas acciones tienden a ser cuestionadas automáticamente por gran parte del país. La oposición, por su lado, acusa al gobierno de no respetar ninguna de las iniciativas de quienes disienten de él. Nadie puede actuar sin que la sospecha de perversa parcialidad desate la ira del sector contrario. Tanto es así que cuando una institución –el Tribunal Supremo, por ejemplo– actúa en el desempeño de sus funciones, en muchos despierta enormes suspicacias acerca de sus verdaderas intenciones. No importa si tales suspicacias tienen base o no, lo que cuenta es que existen en una alta proporción de los ciudadanos.

El país es ingobernable en tal clima de generalizadas sospechas. Cuanto antes, hay que restablecer la confianza en las organizaciones árbitro. En términos prácticos, el paso inicial consiste en escoger unas cincuenta personas para integrar los organismos señalados, incluyendo los funcionarios más cercanos a quienes les correspondería desempeñar los papeles estelares. ¿Seremos capaces de hacer tan decisiva selección?

### **La fuerza del compromiso con nosotros mismos**

La situación del país es sumamente difícil. Por lo menos, en la historia del siglo XX venezolano no es posible identificar una situación en la cual convergieran tantos y tan diversos factores que dificultan cualquier ejercicio de



comprensión de lo que está ocurriendo, de pronóstico de las tendencias y, más aún, de lo que podemos hacer para salir del colosal enredo en que estamos. Ante la magnitud de la complicación en la que vivimos es fácil ilusionarse con una supuesta solución que abarca todas las aristas del problema que nos angustia; una solución que podemos enunciar en poquísimas palabras, que luce redonda, total, una suerte de ajuste general del país después del cual sólo recibiremos agradables noticias. Vana ilusión, porque no existe una solución a los problemas de la nación. No hay magia que valga. Nunca ha existido esa magia.

Además, consideremos que si lográramos encontrar algo así como un macro programa para abordar con éxito los problemas de la economía, la política y la situación social en general, tan milagrosa solución se nos escaparía durante su instrumentación, fase en la cual tantas veces hemos fallado a pesar de las diferencias de las orientaciones de los partidos políticos, grupos o personas que han gobernado. Por eso es bueno insistir en la moderación de las pretensiones, en que en la acción pública no hay nada mejor que una feliz concatenación de pequeñas acciones que permitan tener éxitos parciales y progresivos comenzando por el plazo más corto posible y proyectando la acción en el tiempo. Tan modesto enfoque no nos quitará, de la noche a la mañana, las dificultades, los desagradados, las frustraciones ni los conflictos. Quien prometa hacerlo es un farsante, un demagogo o alguien que oculta una supuesta solución con un elevadísimo trauma social y gran dolor humano. No podemos repetir la historia reciente.

Entre tantas condiciones necesarias para avanzar a paso seguro, la más elemental es saber, con el mayor realismo posible, dónde estamos parados. Para ello, comencemos por conjurar el sempiterno supuesto de que cualquier tiempo pasado fue mejor; que, en principio, íbamos bien, pero un grupo de irresponsables ambiciosos irrumpió en la vida pública con un discurso populista para explotar a su favor los males del país. De este modo, se rompió la paz social y política para rematar con el triunfo electoral de ese grupo con objetivos hegemónicos revolucionarios y una insólita incapacidad de gestión. Si el presidente Pérez hubiese escuchado a quienes le informaron sobre la marcha de una conspiración..., si el fiscal no hubiese actuado contra Pérez..., si el presidente Caldera no hubiese indultado a los golpistas presos..., si los votantes no hubieran electo a Hugo Chávez para la Presidencia —hila un argumento— no estaríamos sufriendo estos menguados tiempos. Curiosa manera ésa de analizar la historia, obsesionada con señalar culpables. La historia ocurrió, nos guste o no lo acontecido. Tratemos de entender lo ocurrido, su por qué, para no repetir tontamente el pasado.

Antes que pretender encontrar responsabilidades en personas, grupos

o en la sociedad completa —el insensato venezolano, por ejemplo— lo útil es tratar de dilucidar cómo llegamos a la situación que hoy vivimos. Hay quienes todavía no se resignan a que la gente haya reaccionado negativamente al ajuste económico de «El gran viraje», cuando la economía crecía a una elevadísima tasa. Y el antichavismo no comprende que gran parte de la población se haya entusiasmado con el discurso de Chávez, y que un tercio de la población le siga siendo fiel, a pesar del aumento de la pobreza y la ineptitud general de su gobierno. Ese antichavismo sigue hablando de la insensatez del venezolano, de la inconciencia o irresponsabilidad política de los votantes, como si la caída del salario real desde 1978, con el consecuente incremento de la pobreza, y el aislamiento de las élites del resto de la población, pudieran pasar sin dejar huella en la sociedad.

Todavía nos enredamos cuando tratamos de comprender la historia reciente de la nación. Ello es inevitable. Grandes han sido los esfuerzos del país para echar hacia adelante e inmensos los errores cometidos. Hemos vivido la frustración de andar y desandar el camino. Los últimos años han sido demasiado traumáticos para esperar de nosotros mismos serenidad en el análisis y *sindéresis* en el actuar. Lo que sí podemos exigirnos es la fuerza moral del compromiso, la disposición a hacer todo lo posible para construir un país decente, es decir, con mayor bienestar y mayor justicia, aprovechando inteligentemente las ventajas y reconociendo, con la mayor crudeza, las limitaciones que nos impiden avanzar a paso rápido. Si esta exigencia nos hacemos, el cambio de rumbo de la nación será radical. Aún nos queda la fuerza telúrica del compromiso con nosotros mismos.

## Referencias

- Hirschman, A. (1964): *La estrategia del desarrollo económico*. México: Fondo de Cultura Económica.
- González de Piñango, N. (1998): «Los hogares y multihogares de cuidado diario». Caracas: Ministerio de la Familia.
- Malavé, J. (1991): «Fuga de talento en Venezuela: tendencias y perspectivas para su estudio». En E. Garbí: *La fuga de talento en Venezuela*. Caracas: Ediciones IESA.
- Moreno, A. (1997): «La familia popular venezolana». Caracas: Centro Gumilla.
- Naím, M. (2003): «Las cinco guerras que estamos perdiendo». *Debates IESA*, vol. VIII, no. 4, julio-septiembre 2003.
- Piñango, R. (1998): «Querer no es poder: el difícil arte de gobernar». *Debates IESA*. Vol. 4, No.1.
- Piñango, R. (2003): «Políticas públicas para transformar el rumbo de un país». En J. Kelly: *Políticas públicas en América Latina. Teoría y práctica*. Caracas: Ediciones IESA.
- Ravell, C., R. Piñango y G. González (1969): *El desarrollo de la comunidad como técnica de inducción del cambio social*. Caracas: Fondo Editorial Común.